

Arturo
Uslar Pietri



en Venezuela

Golpe y Estado

¿Qué está pasando en Venezuela? Después del floreciente crecimiento económico que colocó al país en las estadísticas internacionales como uno de los más avanzados de América Latina, la crisis por la que atraviesa en la actualidad hace temer por su estabilidad política. ¿Dónde y cuándo se originó la situación presente? ¿Hacia dónde se dirige la democracia venezolana?

Con la prosa fluida y amena característica del periodista que es Arturo Uslar Pietri, se narra la historia política de Venezuela a lo largo de este siglo y se explica de manera clara y puntual qué hay detrás de la inesperada crisis en ese país. Este constituye un documento de palpitante actualidad que todo ciudadano debe leer.

Introducción

Lo que ha ocurrido en Venezuela el 4 de febrero de 1992 se veía venir desde hace tiempo. El más superficial observador no podía dejar de darse cuenta del disgusto creciente que la mayoría de la población, particularmente la clase media y los trabajadores, para no nombrar los marginales y los desempleados, venía manifestando en muchas formas ostensibles con respecto a la gestión del gobierno.

Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez tomó posesión del gobierno, a comienzos de 1989, tuvo el valor de iniciar con decisión una rectificación necesaria de la política económica y financiera que había llevado al país a una situación de grave déficit fiscal y de imposibilidad de hacer frente al inmenso peso de la deuda externa. Para ese momento la economía venezolana había llegado a un punto crítico por la imposibilidad para el Estado de seguir sopor-tando un sistema de subsidio y protección generalizado a la producción y al consumo nacionales y un cambio del bolívar con respecto al dólar que ya no era sostenible por la rápida desaparición de las reservas internacionales. Lo hizo con decisión, pero con poco tino. Era menester cambiar una situación inveterada de paternalismo estatal y crear las condiciones para el desarrollo de una economía de mercado. El resultado inmediato fue el desajuste de la actividad económica. Con la devaluación de la moneda los precios subieron velozmente sin que el gobierno hubiera preparado ni medidas compensatorias ni una información adecuada.

La reacción popular fue violenta e inmediata. El 27 de febrero de ese mismo año comenzó una espontánea pro-

testa, no dirigida por ningún sector, que abarcó a Caracas y a muchas ciudades del interior. Hubo saqueos, destrucción de bienes y numerosas víctimas. Allí quedó dramáticamente planteada la gran contradicción que ha constituido el principal escollo para las políticas del presidente Pérez, es decir, la dificultad de lograr, con el menor daño social, transformar una economía subsidiada en otra de mercado, de liberar los precios, de devaluar la moneda, con todas las negativas consecuencias inmediatas que esto tenía que acarrear.

Desde entonces ha habido una reacción hostil generalizada hacia un gobierno que parecía haber provocado, por su acción, la agravación de todos los aspectos negativos de la situación.

Para poder entender el fenómeno hay que remontarse al pasado. Cuando concluyó la primera guerra mundial, Venezuela era uno de los países más pobres y atrasados de la América del Sur, con menos de tres millones de habitantes, en su mayor parte campesinos analfabetas, con una exportación moderada de café y cacao que no sobrepasaba los veinte millones de dólares anuales y con un presupuesto de un monto equivalente.

Por una herencia de las leyes de Indias, el Estado venezolano era y sigue siendo el único propietario del subsuelo, y las primeras explotaciones petroleras realizadas por compañías inglesas y norteamericanas se hicieron bajo el régimen de concesiones, mediante el pago de una participación o «royalty» al fisco nacional. Con el desarrollo de la producción esta participación fue creciendo, primero lentamente y, a partir de 1973, de un modo galopante y desmesurado. Basta decir que entre 1973, en que comienza el ascenso de los precios, y 1984, Venezuela recibió, por el solo concepto de la explotación petrolera, más de 200 mil millones de dólares, que es el equivalente de veinte planes Marshall. Este inmenso poder financiero quedó concentrado en manos del Estado, creando así una primera y funda-

mental paradoja, la de un Estado cada vez más rico y dispendioso en un país mayoritariamente pobre y atrasado. Tal vez sería mucho pedir que tan inmensos, súbitos y crecientes recursos hubieran sido manejados con prudencia y sensatez y con lo que los juristas llaman el criterio de «un buen padre de familia». En lugar de que el Estado dependiera de la nación, como es lo normal, la nación empezó a depender del Estado, dándole al gobierno un poder inmenso que estaba, de hecho, por encima de las instituciones y de los principios democráticos. Una gran parte de esos recursos, que hubiera podido destinarse al progreso social y a la infraestructura para el desarrollo, fue pródigamente destinada a financiar el funcionamiento de innumerables empresas nacionales bajo la inspiración de un vago socialismo paternalista e imprevisor. Estas empresas no solo absorbieron una gran parte de los recursos disponibles para cubrir sus constantes cuentas deficitarias, su exceso de personal y su deficiente gerencia sino que, además, recurrieron, sin control ni coordinación algunos, a contraer cuantiosas deudas con más de cuatrocientos bancos extranjeros. Cuando hubo que encarar la realidad a raíz de la caída de los precios del petróleo, los venezolanos descubrieron con asombro que encima de todo lo que se había gastado alocadamente tenían que asumir, por este concepto, una deuda de más de treinta mil millones de dólares.

Este cuadro negativo se complica y agrava con la presencia numerosa y constante de hechos de corrupción y de enriquecimiento ilícito dentro y en torno del aparato del gobierno. Se han producido grandes escándalos de corrupción en los que han estado involucrados o señalados altos funcionarios, sin que hasta la fecha haya prosperado un solo caso en los tribunales, ni mucho menos sufrido la pena correspondiente alguno de los culpables. Los tribunales están sometidos a los intereses políticos y económicos y la inmensa mayoría de los ciudadanos manifiesta continuamen-

te en los sondeos de opinión su desconfianza por la administración de justicia.

Para poder comprender en toda su magnitud la inmensa crisis política, económica, administrativa y moral que hoy afecta a Venezuela, hay que remontarse en el tiempo a los antecedentes que la explican. No solamente a la ruptura institucional, de inmensas consecuencias, que ocurrió el 18 de octubre de 1945, cuando un gobierno *de facto* surgido de una insurrección militar, con la representación de miembros del para entonces pequeño partido Acción Democrática, tomó el poder, sino aún más atrás, para poder discernir esa historia sumergida que no pocas veces es más poderosa y activa que la visible y que permite conocer muchas de las peculiaridades de la vida venezolana desde el siglo XIX.

La insurrección militar del 4 de febrero de 1992 no debe ser vista aisladamente, como un caso más de intentona golpista por parte de militares ambiciosos, sino que hay que considerarla, si se quiere entender su verdadera significación y comprender mejor la situación real del país, en el contexto del cuadro general de la vida venezolana y de la forma como en los últimos años se ha venido conduciendo el gobierno.

Sería un craso error pensar que la tentativa de los jóvenes oficiales se ha producido en el vacío y, menos aún, que en alguna forma corresponda a una inclinación generalizada a favor de un gobierno autoritario. La inmensa mayoría del pueblo venezolano —me atrevería a añadir que también la de los oficiales de sus Fuerzas Armadas— es partidaria de un régimen democrático, respetuoso de las libertades y de los derechos humanos. La insatisfacción y la actitud crítica hacia el gobierno actual han sido provocadas por los errores y las deficiencias de la política nacional.

Se ha señalado, también superficialmente, que la causa principal del disgusto popular ha sido la aplicación de las medidas económicas y financieras tomadas por el gobierno para iniciar cambios necesarios y hasta inaplazables en la

forma en que la intervención del Estado en la vida económica había venido funcionando, con muy negativos resultados. No es cierto que este malestar y disgusto se deban exclusivamente a la aplicación de esas medidas y a su efecto directo en el nivel de vida de la mayoría de los venezolanos. Muchas de las causas principales del disgusto son anteriores a esas medidas y venían sintiéndose desde los últimos cinco o siete años de manera creciente hasta el peligroso punto de que mucha gente pudiera pensar que eran efectos negativos inevitables en un régimen democrático. Entre esas circunstancias no pueden dejar de mencionarse las siguientes: la incapacidad del gobierno para organizar servicios públicos adecuados. Ni las escuelas, ni los hospitales, ni el servicio de agua, ni las oficinas públicas, ni el correo, ni los teléfonos, funcionan de manera medianamente aceptable. Se puede decir sin exageración que ningún servicio público funciona de manera eficiente, que la mayoría de ellos ha estado abarrotada de personal y casi colapsada de una manera frecuente, lo que podría ilustrarse, en los dos extremos de la escala, por la situación deplorable de las escuelas y del sistema educativo en general y por la situación infrahumana en que se encuentran las cárceles y lugares de detención debido al hacinamiento doloroso de seres humanos de todas las edades en condiciones abyectas.

En el aspecto político, la situación no ha sido mejor. Un viejo pacto, que hoy resulta injustificado y contraproducente, ha hecho que los principales partidos reduzcan las funciones normales de la oposición a un mínimo casi ceremonial. Esto ha provocado que en los últimos años no haya habido oposición efectiva en el Congreso, ni verdaderas opciones diferentes de poder y de programas para ofrecer alternativas eficaces al electorado.

Los graves males que afectan a la democracia venezolana de manera tan dramática tienen una sola causa y raíz, que es el mal uso y el despilfarro generalizado que los gobiernos sucesivos han hecho de la inmensa riqueza que el

petróleo le ha producido al país. El petróleo ha hecho del Estado venezolano, proporcionalmente, uno de los más ricos del mundo. Junto con esa inmensa abundancia fiscal, lo que más ha crecido, dolorosa y paradójicamente, es la población marginal y la pobreza, que hoy alcanza a no menos de la mitad de la población.

Dos han sido las causas principales que han producido esta dolorosa paradoja. En primer lugar, la decisión, compartida por casi todos los partidos democráticos de la posguerra en la América Latina, de encargar al Estado directamente del desarrollo económico, convirtiéndolo en creador, patrón y gerente de múltiples empresas que van desde el petróleo, la electricidad y la siderurgia, hasta la ganadería, la agricultura y los hoteles. La inmensa mayoría de esas empresas, mal concebidas, mal gerenciadas y peor controladas, ha consumido estérilmente la mayor parte de los recursos del Estado en pérdidas de gestión y reposición de capital y fondos financieros, con el natural descuido de las otras atenciones fundamentales del gobierno en la salud, la educación y los servicios.

En segundo lugar, pero no con menor importancia, está la continua e irrefrenable tendencia al paternalismo, a la subvención, a la dádiva, a la protección excesiva de la producción, del consumo y del trabajo nacionales.

Es muy difícil, por no decir imposible, que más allá de los pequeños grupos que lucran y se benefician con esta situación, algún país pueda resignarse a admitir como normal un sistema político y administrativo de tales características. Lo que está planteado en Venezuela desde hace ya tiempo es la necesidad de reestructurar a fondo el sistema democrático, de que las elecciones sean efectivamente posibilidades de cambio, de que la justicia, los servicios públicos, y en particular los relacionados con la educación, la salud y la seguridad personal, correspondan efectivamente a sus fines verdaderos y de que el inmenso gasto público pueda justificarse, razonablemente, por sus resultados positivos.

Este volumen recoge, con la premura de la angustia, un conjunto de reflexiones y proposiciones sobre la situación venezolana, sus causas y sus posibles enmiendas. Está planteada en este país una urgente y necesaria revisión y reconsideración de la forma ineficaz y viciosa en que los gobiernos democráticos han actuado y han entendido su misión.

Sería torpe y conduciría a inevitables errores pensar que la difícil situación que el país sufre se debe exclusivamente a desaciertos de los gobiernos venezolanos desde la restauración de la democracia en 1958. El mal viene de más lejos y cualquier tentativa de enfrentarlo con seriedad requiere la evaluación certera y desapasionada de los sucesos históricos que, en muchas formas, explican la actual situación.

En casi dos siglos de vida independiente venimos arrastrando la consecuencia de graves errores, de infortunadas improvisaciones y de alucinada devoción por vagos principios doctrinarios que poco correspondían a nuestra realidad. Lo que está planteado en Venezuela no es meramente un cambio de gobierno y de rumbo, que se necesita, sino un examen a fondo del concepto mismo del contenido, los objetivos, los medios y el rumbo necesarios para lograr la realización más completa de la Venezuela posible. Esa Venezuela no puede ser otra que la suma de todas las posibilidades reales que sus recursos humanos y naturales y sus circunstancias geográficas e históricas le permitirían alcanzar a este país en un plazo razonable, si fuera capaz de hacer la revisión y la enmienda a fondo de los errores viejos y nuevos que han llevado al país a su presente estado.

He escrito estas páginas no para defender posiciones y atacar adversarios, sino para invitar a todos los venezolanos a una necesaria y salvadora actitud de enmienda de los errores tan costosos que hemos venido arrastrando hasta hoy.

Golpe y Estado en Venezuela

I

El 19 de octubre de 1945 Venezuela amaneció sin constitución, sin leyes, sin congreso, sin autoridades constituidas, en el estupor de una situación de suspensión y ausencia de las instituciones políticas.

Se vio brotar una inesperada y confusa realidad política y administrativa que afectaba todas las formas del gobierno, de la legalidad y de la vida social.

Disuelto el poder legislativo y representativo a todos los niveles, desde el congreso hasta los concejos municipales, indefinida la situación de vigencia de las leyes, la presidencia sustituida por un heterogéneo grupo de militares de rango subalterno y de civiles sin antecedentes de gobierno, pocos entendían a ciencia cierta lo que había pasado y, mucho menos, lo que podía ocurrir en el futuro inmediato. Se había roto, por el acto violento de una minoría subversiva, un largo y difícil proceso que abarcaba todo el siglo, para lanzarse al azar de un futuro desconocido y lleno de riesgos y de posibilidades de todo género, algunas favorables pero las más francamente negativas y llenas de amenazas para el porvenir.

Estaban reducidos a prisión el presidente de la República, algunos de sus ministros, el expresidente López Contreras, altos funcionarios civiles y militares, algunas personalidades distinguidas. Quedaban suspendidas las garantías y los derechos constitucionales, así como todas las leyes que pudieran resultar contrarias a los fines de la «revolución», lo que equivalía a declarar el país en huelga de legalidad. Se clausuró la mayor organización política, el Partido Demo-

crático Venezolano, se suspendió periódicos, se ocupó locales y archivos, para más tarde desterrar, sin fórmula legal ninguna, a las más distinguidas personalidades del régimen depuesto.

La forma y las circunstancias en las que ocurrió el golpe de Estado influyeron poderosamente en el rumbo y carácter que llegaron a revestir los acontecimientos subsiguientes.

Hay que tomar en cuenta la deformación acumulada durante largos años de poder dominante, la falsificación de la historia con fines políticos y de mitología partidista, que han logrado desfigurar y desnaturalizar el significado de ese determinante suceso. Conviene, por lo tanto, restituir algunos aspectos a su verdadera significación histórica.

En primer lugar se debe señalar que ese movimiento en su origen y contenido fue una conspiración militar, con muy pocos propósitos políticos. Se inició y tomó impulso como proyecto de un pequeño número de oficiales de las Fuerzas Armadas, enviados con fines de estudio al Perú. Era la época en la que desde la Argentina se había iniciado una tendencia manifiesta a la intervención de los militares en la vida política al través de la organización de «logias» clandestinas, por medio de conspiraciones y golpes de Estado. Una especie de doctrina del derecho a intervenir los militares en la vida política se había conformado, cuya culminante y más clara expresión fue el «peronismo». En los círculos de estudio y entrenamiento de oficiales en algunos países, como en el Perú, penetró este espíritu ganando adeptos.

Al regreso de Lima, algunos oficiales venezolanos, entre los que estaban Marcos Pérez Jiménez, Julio César Vargas y L. F. Llovera Páez, trajeron la vaga idea y la tentación de llegar a apoderarse por medio de una insurrección del gobierno. Nunca fueron numerosos ni se encontraban en posiciones de mando, pero habían logrado cierta influencia entre sus colegas jóvenes aprovechándose de la situación

que se había creado por la visible falta de acuerdo entre los dos principales jefes políticos y militares de la situación dominante, los generales Eleázar López Contreras e Isaías Medina, para entonces presidente de la República.

Las causas de este enfrentamiento fueron muchas y de varia importancia. La principal de ellas estaba constituida por la decisión, cada vez más evidente, del general López Contreras de volver a alcanzar la presidencia en la oportunidad de la elección de 1946.

Medina no estuvo de acuerdo con este propósito por muchos motivos, entre los cuales no era el menor su convicción de que ambos aparecerían ante la opinión pública y la historia como cómplices en una maniobra de continuismo político, a base de la alternación en el poder, que estaría en abierta contradicción con su decidido propósito de ampliar y asegurar el proceso de afirmación democrática del país. Ante esta situación hizo mucho esfuerzos Medina para tratar de vencer a López Contreras de la conveniencia de buscar un candidato que fuera aceptable para ambos. Esta posibilidad quedó totalmente descartada y el expresidente continuó resueltamente en su empeño de lograr en el futuro congreso elector los votos suficientes para su nueva elección.

La ostensible brecha abierta entre las dos principales figuras políticas y militares que habían iniciado y acelerado el proceso de democratización del país a la muerte de Gómez, planteaba una nueva situación llena de riesgos y posibilidades, que los jóvenes militares conspiradores percibieron como un hecho favorable para sus propósitos.

El fracaso, por razones de salud, de la anunciada candidatura del doctor Diógenes Escalante, en los primeros meses de 1945, ocasionó un importante cambio de circunstancias. La posible candidatura de Escalante había contado no solo con el apoyo decidido del gobierno y de su partido, el PDV, sino, además, con la aceptación de sectores lopecistas, con la adhesión del pequeño Partido Comunista y, por

primera vez, con el propósito declarado del recién fundado partido Acción Democrática de apoyar esa candidatura. Iba a ser, prácticamente, una elección por consenso nacional que no parecía presentar ningún obstáculo.

La súbita inhabilitación de Escalante creó una nueva situación con muchas impredecibles posibilidades. El lopecismo se afianzó en el propósito de su propia candidatura. El gobierno y su partido se lanzaron a la difícil tarea de lograr un candidato aceptable para todos que, finalmente, resultó ser el doctor Ángel Biaggini, distinguido político y jurista tachirenses que se había destacado como el ministro de agricultura que había logrado convertir en ley la gran aspiración de la reforma agraria, de inmensas consecuencias para el futuro del país, y que gozaba de merecida reputación de hombre honesto, laborioso y capaz.

Acción Democrática, por su parte, se halló de pronto con su proyecto político deshecho. En efecto, su táctica había consistido en convencer a los socios militares de posponer la acción armada con la promesa de lograr, en el futuro gobierno de Escalante, llevar a cabo los propósitos de la proyectada insurrección.

No hay que olvidar que Acción Democrática era para 1945 un pequeño partido compuesto principalmente por intelectuales de izquierda, empleados de comercio, profesionales y algunos incipientes dirigentes sindicales, que no contaba en todo el país con más de veinte mil afiliados. Era de carácter heterogéneo y lo único que podía caracterizarlo políticamente era su poca simpatía por los gobiernos de López y Medina, una vaga filosofía social-democrática muy influida por el APRA peruano, y una estructura interna vertical y cerrada, vestigio evidente de la experiencia de Betancourt en el Partido Comunista. El contacto con los conspiradores militares lo realizó secretamente un pequeño número de dirigentes. Ni Rómulo Gallegos, presidente del partido, ni Andrés Eloy Blanco, vicepresidente, ni la mayoría de los dirigentes tuvieron la menor información sobre la conspira-